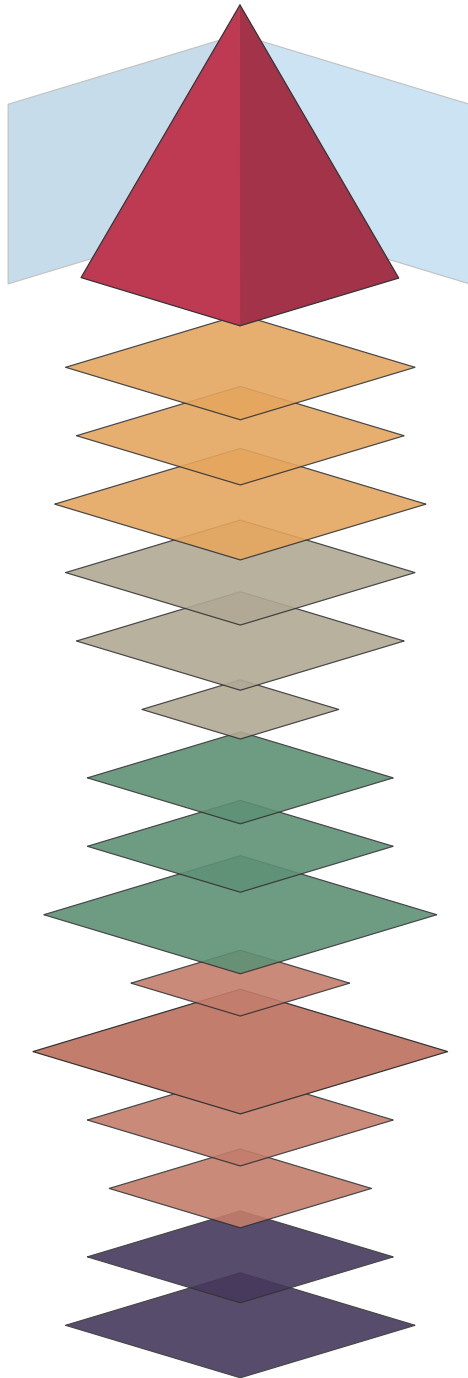




COLOMBIA



7,75

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

2.º de 193 países

1.º de 35 países americanos

1.º de 12 países de América del Sur



MERCADOS CRIMINALES 7,30

TRATA DE PERSONAS	8,00
TRÁFICO DE PERSONAS	7,50
EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	8,50
TRÁFICO DE ARMAS	8,00
COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	7,50
COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES	4,50
DELITOS CONTRA LA FLORA	7,00
DELITOS CONTRA LA FAUNA	7,00
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	9,00
COMERCIO DE HEROÍNA	5,00
COMERCIO DE COCAÍNA	9,50
COMERCIO DE CANNABIS	7,00
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	6,00
DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	7,00
DELITOS FINANCIEROS	8,00



ACTORES CRIMINALES 8,20

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	9,50
REDES CRIMINALES	9,50
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	7,50
ACTORES EXTRANJEROS	7,50
ACTORES DEL SECTOR PRIVADO	7,00



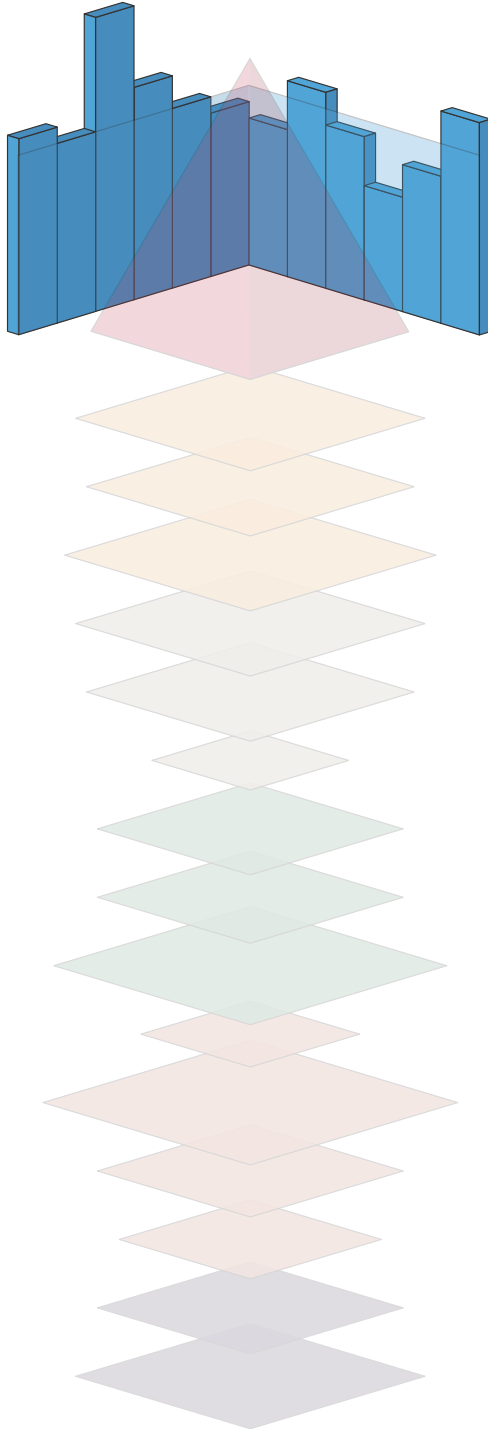
5,63

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA





COLOMBIA



5,63

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

50.º de 193 países

7.º de 35 países americanos

4.º de 12 países de América del Sur

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	6,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	5,50
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	9,00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	6,50
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	5,50
CUERPOS DE SEGURIDAD	5,00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	4,50
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	6,00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	5,00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	3,50
PREVENCIÓN	4,50
ACTORES NO ESTATALES	6,50



7,75

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD



MERCADOS CRIMINALES 7,30



ACTORES CRIMINALES 8,20



CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Colombia es un país tanto de origen como de destino de la trata de personas. Los traficantes de personas actúan dentro de redes establecidas de delincuencia organizada y grupos armados ilegales. El trabajo sexual y la explotación sexual han llamado la atención de las autoridades en algunas partes del país, lo que ha dado lugar a campañas contra el turismo sexual establecido. Sofisticadas redes de trata de personas, dirigidas por colombianos, trafican con mujeres hacia Asia y operan en internet. La situación ha empeorado con la crisis de flujo migratorio mixto procedente de Venezuela, con dinámicas de tráfico de personas a menudo correlacionadas con dinámicas de explotación. Los venezolanos son explotados en las minas y en los lugares de cultivo de hoja de coca y de producción de cocaína, mientras que las mujeres son explotadas sexualmente en las zonas circundantes. Además, se han dado casos de explotación infantil para la mendicidad forzada en las principales ciudades colombianas.

Colombia se ha convertido en un centro de tráfico de personas, especialmente desde que la situación en Venezuela se ha deteriorado y millones de venezolanos han abandonado su país. Los niños y los adolescentes son especialmente vulnerables a las prácticas de tráfico de personas y trabajos forzados en Colombia. Los delincuentes también trafican con ciudadanos africanos, asiáticos, haitianos, ecuatorianos y cubanos a través del país y los agentes estatales se benefician de la industria del tráfico de personas. En la región norte del país, en la frontera con Panamá, existe una ruta bien establecida para las personas que pretenden llegar a Estados Unidos. El mercado delictivo del tráfico de personas está relacionado con otros flujos financieros ilícitos y con dinámicas de blanqueo de dinero, como el traslado ilegal de oro y dinero en efectivo desde y hacia Panamá. Esta situación ha creado una red de mercados delictivos que operan en la ruta y que incluyen mafias transnacionales y locales.

La violencia criminal colombiana se alimenta de extorsiones y cobros ilegales por protección perpetrados por redes criminales organizadas, especialmente en las zonas rurales. Los grupos de tipo mafioso se dedican a esta actividad ilegal, cobrando a comerciantes, terratenientes y empresas por protegerlos de otras redes criminales que podrían atacar su territorio. También participan en cárteles y utilizan plataformas de redes sociales y estrategias digitales para intimidar y aterrorizar a la población. En las ciudades, bandas más pequeñas controlan las calles e imponen sus obligaciones fiscales, de extorsión y de seguridad a las empresas que operan en sus territorios. Este tipo

de actividades aumentan cuando estallan conflictos entre grupos delictivos. En las zonas rurales, los grupos delictivos cobran a los terratenientes por protección o los extorsionan hasta el punto de que tienen que ceder sus derechos sobre la tierra. También gravan y extorsionan las actividades mineras ilegales y el transporte de drogas en los territorios que controlan. Su demostración de fuerza indica el grado de control que estos grupos ejercen sobre un territorio: afectan a los negocios e incluso intimidan a los vendedores ambulantes para que les paguen.

TRÁFICO

El actual conflicto de Colombia con varios grupos armados ha convertido al país en destinatario de armas adquiridas ilegalmente. El colapso económico de Venezuela también ha provocado el desvío de crecientes volúmenes de armas del Ejército a manos de delincuentes colombianos. Cada uno de estos actores criminales ha encontrado sus propios métodos para acceder a las armas de las redes internacionales. Las armas de fuego son lo que más se utiliza en los asesinatos en el país, que a menudo están relacionados con las guerras del narcotráfico. Recientemente, los traficantes han estado introduciendo en puertos chilenos cargamentos de armas procedentes de Asia y Estados Unidos, que acaban llegando a Colombia a través de diversas rutas. A pesar del conflicto en curso, algunas autoridades han pedido a los civiles colombianos que se armen para protegerse, lo que convierte la venta legal de armas en una empresa arriesgada. Colombia se encuentra actualmente entre los países del mundo con mayor número de armas de fuego utilizadas en homicidios y suicidios. A los cuerpos de seguridad también les preocupan las armas de fuego artesanales, fabricadas mediante la manipulación de pistolas de foguero, que se están vendiendo y alquilando a delincuentes y miembros de bandas, incluidas las armas de foguero modificadas, con balas impregnadas en cianuro.

Colombia es un actor notable en el mercado mundial de productos falsificados, como punto de tránsito de mercancías ilegales y como fabricante de productos falsificados para la exportación. El consumo de productos falsificados está profundamente arraigado en la sociedad colombiana, especialmente en la industria de la moda, donde todo el mundo sabe dónde comprarlos y habla abiertamente de la naturaleza falsa de los productos. La pandemia de la COVID-19, las restricciones en los flujos del mercado mundial y el alto precio del dólar han provocado un aumento del mercado local de productos falsificados, sobre todo en ciudades como Medellín, Barranquilla, Cali y Bogotá. Las organizaciones delictivas implicadas en el mercado de la falsificación suelen ser pequeñas, fragmentadas y dinámicas y algunas cooperan con organizaciones más grandes y jerarquizadas, especializadas en mercados o

productos concretos. El mercado también promueve el uso de redes criminales llamadas «oficinas de cobro» para resolver problemas contractuales mediante la violencia.

Debido al elevado precio del dólar, muchos productos se compran en Ecuador y en Venezuela, para evitar los impuestos especiales en Colombia. Por el contrario, las materias primas colombianas se consideran baratas para la economía ecuatoriana dolarizada y se trafican para apoyar la fabricación ilegal. Estos productos se venden después tanto en Colombia como en las economías dolarizadas o parcialmente dolarizadas. El comercio ha cambiado de dirección y se ha adaptado a precios en dólares más rentables y a mejores oportunidades de negocio. Los cigarrillos, las piezas de automóviles y las bebidas alcohólicas figuran entre los productos de contrabando más incautados por las autoridades.

MEDIOAMBIENTE

Las organizaciones criminales colombianas se dedican a la deforestación, principalmente mediante prácticas extorsivas. La crisis de la COVID-19 ha agravado la situación, provocando la deforestación de miles de hectáreas de selva, sobre todo alrededor de parques nacionales y áreas protegidas. La venta ilegal de madera también está muy extendida y las comunidades se dedican a ella, debido a la falta de incentivos para la producción legal. Los grupos armados ilegales controlan ciertas zonas y los disidentes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el Ejército de Liberación Nacional son los principales responsables de la deforestación. Desbrozan tierras para otras economías ilegales, como la minería, el cultivo de coca y la ganadería, que se utiliza como modalidad para el blanqueo de dinero. Como consecuencia, Colombia es el lugar más peligroso para ser activista medioambiental y no son infrecuentes los asesinatos de líderes de la sociedad civil que se dedican a actividades ecologistas.

Colombia, uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, está asolada por el tráfico de animales salvajes, sobre todo de reptiles, que se comercian para obtener alimento y pieles. Aunque se han hecho esfuerzos para combatir el tráfico de animales, el mercado negro sigue prosperando y Europa es el principal destino. Las aves también son muy buscadas como mascotas, sobre todo en la costa caribeña. El comercio ilegal se mantiene mediante el reclutamiento de campesinos pobres para que capturen animales y los revendan a grupos de crimen organizado, que luego se encargan del envío y la comercialización de las especies. Los líderes ecologistas, especialmente los de las comunidades indígenas, que viven y protegen sus territorios, son vulnerables, debido a la impunidad y la falta de interés en perseguir a las organizaciones criminales que controlan los distintos territorios.

La minería ilegal de oro es el delito contra los recursos no renovables más común y lucrativo de Colombia. Los cuerpos

de seguridad se centran principalmente en detener a los pequeños mineros y destruir los equipos, pero no han perseguido a los grandes inversores, los delitos empresariales relacionados y la corrupción. El oro ilegal suele blanquearse y exportarse con documentación colombiana. Los grupos criminales se dedican cada vez más a la minería ilegal, debido al aumento de los precios del oro y al debilitamiento del control medioambiental provocado por la pandemia. Otros metales, como el coltán y el wolframio, también se extraen en lugares controlados por grupos ilegales. El comercio de esmeraldas ha sido históricamente un bastión de la mafia y es muy utilizado como herramienta de blanqueo de dinero. El comercio ilegal de petróleo ha resurgido, con bandas colombianas que introducen de contrabando petróleo venezolano en Colombia. El petróleo y la gasolina siguen siendo productos codiciados para la producción de cocaína.

DROGAS

Aunque menor que el comercio de cocaína, el comercio de heroína en Colombia sigue generando ingresos considerables para las organizaciones de traficantes nacionales y tiene efectos negativos en la sociedad. Los clanes criminales de Cali dirigen el comercio y abastecen a los mercados de gama alta de EUA, en colaboración con los cárteles mexicanos. Narcotraficantes independientes, grupos mafiosos locales y cárteles mexicanos se disputan el cultivo de adormidera, que proporciona ingresos a las comunidades locales de los departamentos de Nariño y Cauca. Los narcotraficantes pagan a las comunidades indígenas por extraer el látex de la adormidera, que revenden en Cali y Bogotá para obtener beneficios. Aunque la Policía ha hecho algunos progresos en la confiscación de heroína, la mayor parte sigue transitando por el país.

Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo, que se trafica a los mercados norteamericanos, europeos y asiáticos, así como dentro de la región: Brasil es uno de los mayores mercados consumidores de cocaína del mundo. Colombia está produciendo más cocaína que nunca y es probable que los altos niveles de producción persistan a corto plazo. El Gobierno colombiano ha intentado impulsar de nuevo la fumigación aérea, a pesar de las advertencias y las pruebas de que no es la estrategia más eficaz para acabar con las plantaciones de coca. Hay indicios de que el país también exporta base de cocaína a otras naciones sudamericanas para su posterior producción. El consumo local también ha aumentado, sobre todo en los centros urbanos, donde la venta de cocaína se ha convertido en una importante fuente de ingresos para las organizaciones mafiosas locales.

El cannabis es la segunda droga más lucrativa y traficada después de la cocaína, pero su rentabilidad dentro del país sigue sin estar clara. La producción requiere muchos recursos y los grupos brasileños importan cada vez más cannabis crepey colombiano, debido a su creciente popularidad y a sus potentes efectos. De hecho, la mayor parte de

las exportaciones de cannabis colombiano son de este subproducto, que contiene niveles de THC más altos que la marihuana normal y se produce principalmente en la región del Cauca. El consumo recreativo entre adultos sigue estando castigado por las autoridades y el consumo de cannabis se mantiene estable entre los adultos colombianos, debido al alto estigma social. En cuanto al consumo local, la venta ilegal y los cultivadores legales que cultivan para uso personal conforman la distribución del mercado en las principales ciudades. Después de EUA y Paraguay, Colombia es el país con mayor número de incautaciones de cannabis.

El tráfico de drogas sintéticas en Colombia parece ser una pequeña industria nacional, gestionada principalmente por pequeños grupos en las zonas urbanas del país. El consumo de drogas sintéticas está aumentando, sobre todo en los clubes nocturnos y las redes sociales han influido en las tendencias de consumo. La droga 2C-B o «tusi» se ha popularizado, gracias a que los influencers de las redes sociales y los usuarios de las plataformas hablan de su consumo, y su precio ha bajado considerablemente en los últimos años. Sin embargo, los expertos advierten de que pocas muestras eran compuestos reales de 2C-B, ya que la mayoría eran ketamina con diferentes mezclas. Los cárteles mexicanos parecen controlar el mercado en la región, utilizan a Colombia como ruta de tránsito entre varios países y no hay evidencias de producción local.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

Colombia se ha convertido en uno de los países de la región más afectados por los ciberataques, solo por detrás de Brasil y México. La ciberdelincuencia ha aumentado en América Latina, especialmente durante la pandemia, cuando la población dependía cada vez más de los recursos en línea para las operaciones bancarias y los servicios gubernamentales. Esta dependencia los ha hecho más vulnerables a los delitos dependientes de la cibernética. En los últimos años, Colombia ha experimentado un notable aumento de las denuncias por ciberdelincuencia y la mayoría de las actividades fraudulentas se llevan a cabo en sitios que se hacen pasar por canales oficiales y gubernamentales, para extraer información. El ransomware sigue siendo el mayor problema, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. La violación de datos personales se ha convertido en la actividad delictiva de mayor crecimiento en Colombia, seguida de cerca por el acceso forzado a la información. Las ciudades más afectadas son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga.

DELITOS FINANCIEROS

Los delitos financieros son un problema omnipresente en Colombia y el fraude financiero por medios cibernéticos es un fenómeno común. Las pequeñas y medianas empresas suelen ser el blanco de estafadores que se hacen pasar por otras empresas y las engañan para que adquieran servicios

que no pueden prestar. La evasión fiscal también es un problema importante, ya que el país tiene una de las tasas más altas del mundo. Se sospecha que las organizaciones criminales se benefician de estas modalidades y algunos grupos políticos y clanes poderosos implicados en escándalos de evasión fiscal también están siendo investigados por tráfico de drogas, blanqueo de dinero y por actuar como testaferros. La malversación de fondos públicos también ha sido un problema de larga data en Colombia, con administraciones gubernamentales que han sufrido escándalos relacionados.

ACTORES CRIMINALES

Colombia alberga numerosos grupos de tipo mafioso, paramilitares y guerrilleros, poderosos y sofisticados, implicados en un conflicto largo y complejo, alimentado por el narcotráfico. Estos grupos están implicados en el crimen organizado transnacional y en actividades de bajo nivel, como la extorsión, con un impacto social considerable. También ejercen el control social y la gobernanza en determinadas zonas, imponiendo normas, regulando la actividad civil y prestando servicios sociales en lugar del Estado. La lucha de décadas del Estado contra estos grupos sigue consumiendo gran parte del presupuesto y de los recursos militares y policiales del país.

Las redes de crimen organizado de Colombia, aunque fragmentadas, siguen estando muy estructuradas y se adaptan a los cambios del panorama de la delincuencia transnacional. Estos grupos buscan constantemente nuevas formas de diversificar sus metodologías o de trabajar con redes más pequeñas e informales. Estas redes son responsables de una amplia variedad de actividades delictivas, como el tráfico de drogas, el tráfico de productos no renovables, armas y flora y fauna y el contrabando y la trata de personas. Además, los grupos de tipo mafioso están contratando a redes criminales para que operen y cometan actos de violencia en regiones donde no tienen presencia ni control, lo que beneficia a ambas partes.

El tráfico de drogas en Colombia implica a varios actores extranjeros, como los cárteles mexicanos, las mafias europeas y las bandas venezolanas. Los cárteles mexicanos tienen una presencia significativa en el país, pero no parecen estar intentando establecer un control territorial ni formar sus propios ejércitos. En cambio, compran cocaína a diversas organizaciones criminales colombianas y luego la transportan y la revenden en Estados Unidos. Las bandas venezolanas están cada vez más implicadas en el tráfico de drogas en Colombia, debido a la creciente crisis migratoria. También están especializadas en la trata de personas y el contrabando y operan en distintas fases de las rutas terrestres ilegales en la frontera entre Venezuela y Colombia. Las bandas brasileñas se han convertido en intermediarias: compran cocaína colombiana y después la envían a los mercados europeos. También parecen tener vínculos con mafias italianas.

La corrupción prolifera en Colombia en todos los niveles del Estado, pero se considera menos sistémica y violenta que en otros países latinoamericanos. Sin embargo, la corrupción ha crecido en los últimos años, extendiéndose a sectores antes considerados técnicos e implicando a altos cargos públicos. La Policía y el Ejército también se han visto implicados en diversos escándalos, como la colaboración con redes criminales y la represión violenta de movilizaciones sociales, con el resultado de personas desaparecidas, muertes e impunidad. Se han destapado escándalos de corrupción en los que están implicados agentes estatales en la explotación en torno a la Amazonia, con complejas redes que incluyen redes armadas, agentes privados y representantes estatales que actúan contra los esfuerzos de los líderes ecologistas. A pesar de los esfuerzos por abordar la corrupción y la violencia mediante la justicia transicional y las comisiones de la verdad, los actores integrados en el Estado siguen socavando los avances.

Los actores del sector privado en Colombia están implicados en una serie de actividades ilegales, como ofrecer sobornos, ayudar a organizaciones delictivas y participar en el blanqueo de dinero. Las organizaciones delictivas siguen interfiriendo en las instituciones gubernamentales y en los intereses privados. Los créditos a pequeña escala, conocidos como «gota a gota», son un ejemplo de las actividades ilegales llevadas a cabo por banqueros, expertos financieros y profesionales de los negocios. Estos préstamos suelen estar controlados por organizaciones delictivas más grandes y son adquiridos por personas que no pueden acceder a las opciones bancarias o crediticias tradicionales. Algunos negocios y empresas también se benefician de la zona gris del préstamo de dinero, ofreciendo sus servicios a través de redes sociales y aplicaciones. Además, hay una cohorte de abogados, contables y profesionales del derecho que ayudan a los narcotraficantes a negociar acuerdos con las autoridades gubernamentales y a negociar acuerdos de extradición.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

El Gobierno colombiano ha adoptado un enfoque de línea dura frente al crimen organizado, con el objetivo de debilitar a los grupos criminales, especialmente a la luz del acuerdo de paz negociado con las FARC. Sin embargo, la apuesta del Gobierno por la erradicación forzosa de los cultivos de droga, en lugar de programas más suaves de sustitución de cultivos, y su férreo enfoque de la seguridad ciudadana, han provocado un aumento de la violencia y la actividad delictiva, sobre todo en zonas rurales y en los lugares controlados por grupos armados y redes criminales. En el 2021, Colombia experimentó el mayor número de homicidios violentos en siete años, con situaciones especialmente caóticas en el departamento del Valle del Cauca y en Cali. La actual crisis humanitaria, derivada de los conflictos entre grupos armados no estatales, ha agravado aún más la situación, con altos niveles de desplazamiento forzado y masacres. La ineficacia del Gobierno a la hora de aplicar los acuerdos y las recomendaciones de paz también ha contribuido a agravar los problemas de seguridad. Aunque Colombia ocupa un lugar destacado en América Latina en términos de transparencia gubernamental y rendición de cuentas, la corrupción y la impunidad siguen siendo obstáculos importantes para la confianza pública en los organismos estatales. El hecho de que el Gobierno no haya cumplido sus promesas de transparencia en relación con los fondos destinados a combatir la pandemia de la COVID-19, unido a varios escándalos de corrupción de gran repercusión en

la última administración, no han hecho sino aumentar estas preocupaciones. Sin embargo, Colombia sigue estando por encima de la media en términos de acceso a la información.

Colombia ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales relevantes, pero aún debe ratificar el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego. EUA y la UE han sido socios y aliados claves de Colombia, proporcionando apoyo y financiación para abordar cuestiones como el narcotráfico, los grupos armados, los acuerdos de paz y las crisis migratorias. Colombia cuenta con un sólido marco legislativo para identificar y combatir el crimen organizado, con diversas leyes relativas al crimen organizado, las drogas, las armas de fuego y el tráfico. Sin embargo, hay debates en curso sobre la inacción del Gobierno a la hora de evitar abusos del Estado durante las movilizaciones nacionales, así como sobre la corrupción y las malas prácticas en las empresas que manejan bienes incautados, incluso por parte de las autoridades gubernamentales.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El sistema judicial de Colombia se considera estable y diverso, pero adolece de debilidad en el debido proceso y de falta de protección adecuada. Aunque la Fiscalía General cuenta con divisiones especializadas para hacer frente al crimen organizado, la corrupción y la insuficiencia de los recursos han sido un reto persistente para el Poder

Judicial, lo que dificulta el acceso de muchos colombianos al sistema judicial. La Corte Suprema, el tribunal más alto del país, también se ha visto envuelta en escándalos de corrupción. Además, el sistema es criticado a menudo por su alto índice de reincidencia y su incapacidad para castigar eficazmente a los delincuentes. En la actualidad, un sistema judicial diferente está gestionando la justicia transicional como parte de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. En cuanto al sistema penitenciario, son constantes los escándalos de contrabando y otras actividades ilícitas dentro de las cárceles, en las que el personal y otras autoridades parecen ser cómplices. Incluso se han registrado casos de reclusos que extorsionan a personas desde el interior de las cárceles, aparentemente con el conocimiento de las autoridades. Recientemente, la situación del sistema penitenciario ha empeorado.

Colombia cuenta con unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado y con una de las mayores fuerzas armadas de la región. Sin embargo, debido a las dificultades del terreno, la corrupción y la ineficacia del sistema, las fuerzas de seguridad luchan por combatir eficazmente a los actores criminales, lo que lleva a la consolidación del control criminal en algunas zonas. Aunque el país cuenta con los recursos y la infraestructura necesarios para luchar contra el crimen organizado, se queda corto en su aplicación. La reforma de la Policía se ha convertido en una cuestión política importante tras las protestas por los asesinatos cometidos por la Policía, pero es poco probable que se aprueben propuestas legislativas.

Las fronteras de Colombia con Venezuela y Ecuador son problemáticas y porosas, lo que permite a los grupos armados ilegales llevar a cabo operaciones y escapar. El Estado no ha sido capaz de establecer una presencia efectiva de sus cuerpos de seguridad y de las instituciones y servicios estatales en muchas zonas, lo que ha permitido a los grupos criminales ejercer un control territorial, social, económico y político, especialmente en regiones rurales remotas. En algunas zonas, los actores armados han asumido responsabilidades estatales, como la impartición de justicia y la vigilancia y el control territorial. Esta situación ha provocado el reciclaje de los grupos armados y la entrada de nuevas organizaciones criminales tras la desmovilización de las FARC, aunque el Estado colombiano ha logrado algunos avances marginales en la recuperación del control de diferentes regiones.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

El país sigue teniendo dificultades para hacer cumplir la normativa contra el lavado de dinero, sobre todo en el sector de los servicios virtuales. Además, Colombia está lidiando con el problema de Panamá, que está clasificado como jurisdicción bajo vigilancia reforzada, debido a su implicación en actividades de blanqueo de capitales. Para

hacer frente a estos retos, Colombia está redoblando sus esfuerzos para colaborar con la comunidad internacional, en particular con Estados Unidos.

A pesar de la volatilidad económica de los países vecinos, Colombia ha conseguido mantener un fuerte control de su economía. En las zonas urbanas ha disminuido la actividad informal, aunque sigue siendo una parte considerable de la economía. Las zonas rurales, en cambio, siguen luchando contra la informalidad, debido a la falta de oportunidades de inversión y de servicios financieros. Sin embargo, el país está avanzando en el fortalecimiento de su entorno regulador económico. Colombia también ha mostrado avances significativos en la lucha contra la corrupción y la Fiscalía General ha procesado varios casos de corrupción de alto nivel.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Colombia cuenta con legislación para proteger a las víctimas del conflicto armado, la trata de personas y la drogadicción, pero la aplicación de estas leyes a menudo se queda corta, lo que provoca retrasos y deficiencias. La ineficacia del Gobierno a la hora de investigar, procesar y condenar a los delincuentes pone de manifiesto la necesidad de mejorar las estrategias de lucha contra la delincuencia. La protección de los testigos también es motivo de preocupación, ya que las personas se enfrentan a amenazas, especialmente por parte de las redes del crimen organizado. Las comunidades rurales e indígenas, así como los activistas, carecen de protección suficiente por parte del Gobierno, lo que dificulta que busquen justicia a través de los canales formales. El incumplimiento, por parte del Gobierno, de los protocolos para convocar a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y sus críticas a los mandatos de paz y a la implementación de los acuerdos de paz han creado un impasse institucional, lo que ha dado lugar a un elevado número de peticiones de protección del órgano de justicia transicional.

Las estrategias para prevenir el crimen organizado en Colombia se han visto eclipsadas por las iniciativas de seguridad de línea dura y los programas de sustitución de cultivos de drogas están perdiendo impulso. Sin embargo, se están aplicando estrategias de prevención no policiales, como el despliegue de unidades de forma preventiva y la vigilancia policial de puntos calientes. Aunque el Gobierno ha suspendido los permisos de armas, los particulares aún pueden adquirirlas legalmente.

La sociedad civil colombiana desempeña un papel vital en el análisis y la prevención de las actividades del crimen organizado en el país. Existen varios observatorios relacionados con la delincuencia y ONG que trabajan para ayudar a los jóvenes vulnerables a escapar de las bandas. A pesar de las amenazas y la violencia contra las organizaciones y los líderes de la sociedad civil, los actores no estatales siguen poniendo en marcha proyectos e iniciativas

en beneficio de las poblaciones vulnerables. Sin embargo, Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para periodistas y activistas medioambientales, que con frecuencia son objeto de amenazas de muerte, agresiones físicas, secuestros y asesinatos. Además, la dinámica del conflicto no ha disminuido en los dos últimos años, lo que deja a los defensores de los derechos humanos y a los activistas vulnerables a las amenazas violentas. Los grupos de propiedad privada dominan el panorama mediático del país y la falta de transparencia de los intereses empresariales y los propietarios de los medios de comunicación es un problema. Durante la crisis de las movilizaciones sociales del 2021, muchos periodistas que cubrían las protestas fueron agredidos y la mayoría de los incidentes se atribuyeron a la Policía. El Gobierno y las Fuerzas Armadas también crearon listas negras de líderes y activistas de la oposición, para perseguir su actividad en internet.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.